

Tercero; compúlsese testimonio de la sentencia del Juez de Distrito y de los documentos que acompañó el gobernador á su informe, y remítanse al Tribunal del Estado de Coahuila, por la responsabilidad que pueda resultar al Juez de lo criminal referido; y lo acordado.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafraqua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copia, que certifico. México, Agosto veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

COMPETENCIA.

Entre el juez 2º de lo civil de México y el de 1ª instancia de Durango, para conocer del juicio que D. Juan N. Flores sigue contra D. Pedro y D. José M. Martínez sobre rescision de un contrato de compañía y rendicion de cuentas.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El fiscal dice: que ha examinado los voluminosos autos que se tienen á la vista. Ellos versan sobre la competencia que el juzgado 2º de lo civil de México ha suscitado al 1º del ramo criminal de Durango, por excusa ó impedimento de los del ramo civil para conocer del juicio que D. Juan N. Flores sigue contra D. Pedro y D. José

M. Martínez, sobre rescision del contrato de compañía y rendicion de cuentas.

El suscrito ha estudiado detenidamente las razones en que cada uno de los jueces competidores apoyan sus respectivas jurisdicciones, y encuentra que las del juez de Durango son sobremanera fundadas, y á fin de que esta respetable sala se persuada tambien de ello, el fiscal hará un ligero extracto de este negocio, en cuanto baste á su objeto.

Primeramente: D. Juan N. Flores, celebró por escritura pública en la ciudad de Durango un contrato de compañía con D. Pedro y D. José M. Martínez. Este contrato tenia por objeto, que Flores entregara á sus socios las haciendas de Avilez y anexas, á fin de que cultivándolas los segundos se dividieran anualmente y por mitad y deducidos los gastos, el producto de aquellas fincas. Con efecto, los Martínez llegaron á ocupar las haciendas, Flores alega que contra su voluntad; pero el hecho es que Flores despues les reconoció su ocupacion, puesto que luego les demandó ante el juez del contrato, domicilio de los demandados, la rescision del contrato de sociedad y rendicion de cuentas con pago, por el tiempo que los referidos Martínez habian tenido las haciendas.

Puesta la demanda por Flores, la contestaron los demandados y en la contestacion reconvinieron al actor por daños y perjuicios; esto á su vez contestó á la mutua reconvenccion, y mandado abrir el juicio á prueba cada uno rindió las que á su respectivo derecho convenia. Concluido el término probatorio y con fecha 14 de Octubre de 1869, el juez de Durango mandó correr traslado á cada una de las partes para que alegaran de buena prueba. Sacados los autos por la parte de D. Juan N. Flores, la de los Martínez tuvo necesidad de acusarle rebeldía por medio de su apoderado el Lic. Hernandez. Entregados los autos se ofreció explayar la defensa al tiempo de la vista. A su vez Flores, tuvo que acusar re-

beldía á los demandados para el mismo objeto, y en este estado quedó el pleito, cuando Flores introdujo el recurso de amparo de garantías que se ventiló en esta Corte Suprema, concluyendo con la sentencia de 4 de Julio próximo pasado, y de la cual el Ministerio fiscal se ocupará luego, por ser una de las razones en que el juez de México apoya su jurisdicción; siendo la otra la novación que dice cometida por el juez de Durango, y por lo que según lo prevenido en la ley 8ª, tít. 9º lib. 5 de la Recopilación de Indias, debe pender su jurisdicción, caso que le fuere reconocida.

Pero sin atropellar las ideas, fijémonos antes en las razones del juez de Durango, que como ha dicho el que suscribe, en su opinión son decisivas.

Es una axioma universalmente reconocido, que el actor debe seguir el fuero del reo; lo es también, que el fuero preferente solo ó en concurrencia con cualquiera otro, es el que surte el domicilio: que el lugar del contrato produce también fuero, siempre que en él se encuentre el demandado al tiempo de entablarse la demanda, y la acción por la que ella se promueve sea personal. Es también de derecho inconcuso, que uno de los efectos que produce la contestación del pleito: "Es que ambos litigantes quedan sujetos al juez aunque sea incompetente para alguno de ellos;" *quia ubi captum est iudicium, ibi finem accipere debet*. (Inútil es decir que esta regla tiene la excepción de que al contestar el reo no oponga la declinatoria de jurisdicción, como ha pasado en el presente caso en que los demandados lejos de hacerlo, contestaron y siguieron el pleito hasta el punto que se deja expresado) ley 8ª tít. 10 part. 3ª. Por último: es también una teoría del derecho civil y aun lo era del canonico: "que el demandado no solo pudiera alegar excepciones para enervar ó destruir la pretensión del demandante, sino que si tiene algún derecho ó acción para reconvenirle judicialmente, puede usar de este derecho ó acción an-

te el mismo juez por quien ha sido emplazado, aunque no sea competente para el actor." La obligación de esto para contestar la mutua petición es tan forzosa, que si el actor se niega á hacerlo, el reo puede negarse á su vez á contestar la demanda; ley 4ª tít. 10, y ley 32 tít. 2º part. 3ª.

Pues también, con arreglo á estas máximas de la ciencia legal, es como se ha promovido y seguido ante el juez de Durango la demanda de Flores contra los Martínez; las constancias que se tienen á la vista persuaden de ello, y el suscrito no entra á hacer un estudio comparativo y detallado, porque basta la simple relación de los autos para tal objeto. Así pues, fundado en estos principios que el fiscal ha exployado, es por los que el juez de lo criminal de Durango defiende su jurisdicción para conocer de este negocio.

Pero para mejor ilustrar la cuestión, bueno será, aunque sea ligeramente, examinar las razones en que el juez de México apoya la suya. Ellas deben tomarse del informe que ha rendido á esta Corte Suprema en su oficio de 10 de Noviembre próximo pasado, y corre agregado á estos autos.

En esa pieza dice el juez, que el hecho en que funda su jurisdicción es el domicilio del Sr. Flores, situado en México, cuya circunstancia, añado, lejos de estar contradicha, está confesada por todos: después alega también la innovación durante la competencia, y por la que el juez que ha innovado ha perdido su jurisdicción. También se alega como por incidencia el juicio de amparo de que mas antes se ha hablado.

Pues bien, comenzando por este debe decirse; que el juicio de amparo no tiene mas objeto que volver á reponer las cosas al estado que tenían antes de la violación de la garantía reclamada, dejando por lo mismo nulo y de ningún valor el acto de la autoridad contra quien se intenta el recurso por lo mismo, la decisión de esta Corte Suprema pronunciada en el intentado por

el Lic. Rafael Pescador á nombre de D. Juan N. Flores en 4 de Julio próximo pasado, solamente pudo contraerse á la disposicion del C. general Francisco Ortiz de Zárate, gobernador del Estado de Durango, en virtud de la que el C. Lic. Gerónimo Quijar fué separado de las haciendas de Avilés, San Fernando y anexas que le fueron entregadas como representante de Flores; por esto fué que esta Corte en dicho fallo usó de estas expresas y terminantes palabras: "debiendo por lo mismo reponerse las cosas al estado en que se hallaban á la vez en que el C. Lic. Gerónimo Quijar quedó entregado en virtud de ese arreglo, (uno celebrado con el gobierno) de los bienes de su representado D. Juan N. Flores. Por lo mismo, de esas mismas palabras, de la naturaleza misma del recurso de amparo se deduce luego, que el fallo de la Corte no podia en manera alguna preocupar, mudar ó innovar cuestiones absolutamente ajenas de aquellas que oran el objeto único y exclusivo del juicio de amparo; y en consecuencia, tampoco pudo aquella decision afectar al litigio pendiente entre Flores y los Martinez sobre rescision del contrato de compañía y rendicion de cuentas, ni tampoco respecto de la mutua peticion ó reconvenccion intentada en ese litigio por los Martinez contra Flores.

Respecto de que D. Juan N. Flores tiene aquí su domicilio, ya se ha visto que por la ley está prevenido que en la reconvenccion el actor se sujeta al juez ante quien demandó al reo que le reconviene. Al suscrito le parece una verdadera é importuna redundancia al dirigirse á esta respetable sala, repetir aquí las razones que el legislador tuvo presentes para dictar esa disposicion y que las esplayan todos los autores de derecho.

Ocupándonos de la tercera razon que alega el juez de México para apoyar su jurisdiccion, á saber, la innovacion cometida por el juez de Durango, practicando diligencias despues de habérsele anunciado la

presente competencia. El fiscal deplora como el que mas esos atentados; provee los funestos resultados á que puedan dar lugar; y sin embargo, y como lo ha sostenido en diversas ocasiones, no puede pedir que se aplique al juez innovador la pena que marca la ley 8^a tit. 9^o lib. 5^o de la Recopilacion de Indias. En el sistema actual que nos rige, segun nuestras actuales instituciones, la observancia de esa ley, es absolutamente incompatible con ellas. Pendiente la competencia, dice un autor, ninguno de los jueces contendientes puede innovar algo, *so pena* que el que lo atentare pierda el derecho que pudiera tener al pleito ó negocio de que se trata. Y en efecto, quitarle á un juez el conocimiento de un negocio por tal causa, es una verdadera pena, y esta Corte Suprema tiene la jurisdiccion bastante para castigar á un juez, respecto del que no tiene ninguna autoridad, puesto que aquel depende de un soberano distinto? No sucede lo mismo de la decision simple y pura de la competencia, porque esto punto ya está resuelto en la Constitucion general. Por otra parte, esa pena en la actualidad, vendria á ser un castigo impuesto, no al verdadero delincuente, sino á persona que no tiene culpa alguna. Todo eso se expresa con bastante claridad en el dictámen acerca de la acusacion que hizo la legislatura del Estado de México, contra la 1^a sala de la Suprema Corte de Justicia (aprobado por la mayoría de dicha Cámara) ley 8, tit. 9, lib. 5 de la Recopilacion de Indias. "Esta ley, decia la seccion del gran jurado de la Cámara de representantes, dada para una monarquía "donde todos los jueces eran súbditos de "un mismo soberano y tenian una misma "jurisdiccion, presenta muchos inconvenientes para su aplicacion en el sistema federal que nos rige en donde los jueces son "súbditos de diversos soberanos y de muy "distinta jurisdiccion. El legislador español "quizo imponer una pena al juez que innovaba, porque nada perdía su soberanía

“con que este ó el otro juez conociese, ni
 “las partes se perjudicaban, por ser todas
 “de una misma jurisdicción. No sucede es-
 “to bajo el sistema federal cuando se versa
 “la competencia entre jueces de diversos
 “Estados, porque aquí no es la pena para
 “el juez, no es el que pierde solamente si
 “no la jurisdicción y soberanía del Estado
 “y las partes que por la ignorancia ó mali-
 “cia del juez tienen que sujetarse á otro
 “extraño y contra lo que se les tenía pro-
 “metido en la carta fundamental de su Es-
 “tado. Semejante ley, concluye, como
 “opuesta al sistema, no está vigente.”

Pero el fiscal repite lo que ha dicho otras
 veces; que está muy lejos de aprobar la
 conducta arbitraria y atentatoria de esos
 jueces, que como el de Durango se permi-
 ten hollar los principios mas comunes del
 derecho; el fiscal opina que esos hechos de-
 ben manifestarse al tribunal superior res-
 pectivo á fin de que en uso de las atribu-
 ciones que sus leyes fundamentales y se-
 cundarias le concedan, obre respecto del
 juez innovador por haberse excedido de sus
 facultades, toda vez que las leyes previenen
 que iniciada una competencia los jueces
 suspendan todo procedimiento.

Por todo lo expuesto, el suscrito conclu-
 ye con las siguientes proposiciones que su-
 jeta á la deliberación de esta respectable
 sala.

Primera; se declara que el juzgado 1º
 de lo criminal de Durango, es el competen-
 te para seguir conociendo del pleito que
 D. Juan N. Flores ha promovido á los se-
 ñores Martínez sobre rescisión del contrato
 de compañía y rendición de cuentas, rela-
 tivo todo á la hacienda de Aviléz y anexas.

Segunda; remítase al tribunal superior
 de Durango copia testimoniada de las cons-
 tancias que obran á fojas 9, 10, 11, 12,
 13, 14 y 15 del cuaderno de competencia
 formado por el juzgado 2º de lo civil de
 México, para los fines indicados en el cuer-
 po de este pedimento.

Tercera; Devuélvanse las actuaciones al

juez de Durango en la forma de estilo; re-
 mítase copia igual al de México para su
 conocimiento y archívese el presente Toca.

México, Junio veinticuatro de mil ocho-
 cientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Alta-
 mirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto ocho de mil ochocientos
 setenta y uno.

Vista la competencia promovida por el
 Juzgado 2º de lo civil de esta ciudad al 1º
 del ramo de lo criminal de Durango, fun-
 cionando por impedimento del de lo civil
 para conocer de la demanda interpuesta
 por el C. Juan N. Flores á D. Pedro y D.
 José María Martínez sobre rescisión de
 compañía y rendición de cuentas; lo expues-
 to por las partes y por los jueces competi-
 dores en apoyo de la respectiva jurisdicción;
 lo pedido por el C. fiscal ante esta primera
 sala; y oído lo alegado ante ella al tiempo
 de la vista por los CC. Licenciados Ma-
 nuel Inda en apoyo de la jurisdicción del
 Juez de México y Nicolás Medina en el de
 la del Juez de Durango. Considerando:

Primero; que conforme á derecho, el
 Juez ante quien se entabla la demanda, es
 competente para conocer de la reconven-
 ción.

Segundo; que D. Juan Flores demandó
 á los Sres Martínez ante el Juez de Duran-
 go; y reconvenido por ellos, no solo contes-
 tó á la reconvencción, sino que siguió todo
 el juicio hasta la citación para sentencia.

Tercero; que aunque no hubiera duda
 alguna en que los actos ejecutados por
 el Juzgado de Durango despues de iniciada
 la competencia, fueron una verdadera in-
 novación, los efectos legales de esta solo
 serian la nulidad de lo actuado y la res-
 ponsabilidad del Juez.

Cuarto; que la ley 8ª tit. 9º lib. 5º de
 la R. L. no es aplicable ya en la parte

en que priva de la jurisdicción al Juez que innova, cuando la competencia se sostiene entre jueces de diversos Estados ó entre jueces federales y de Estado; por que atendida la esencia del sistema federal y siguiendo los preceptos constitucionales, esa disposición debe considerarse contraria á la soberanía de la Unión ó de los Estados; puesto que por ella no solo se priva de la jurisdicción al Juez innovador sino al Tribunal federal ó de algun estado, invadiéndose por lo mismo las atribuciones y lastimándose los derechos federales ó locales en su respectivo caso; de conformidad con lo pedido por el C. fiscal, se declara:

Primero; que el Juez de Durango es competente para conocer del juicio mencionado.

Segundo; no hay condenación de costas.

Tercero: Devuélvase las actuaciones al Juez de Durango, con copia certificada de esta sentencia; remitiéndose copia igual al Juez 2º de lo civil de esta ciudad, para los efectos consiguientes.

Cuarto: hagase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron (firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias, México siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Gerardo de la Torre, contra una orden de prision dictada por el C. Gefe político de San Juan del Río.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor dice: que el C. Gerardo de la Torre y Rubí ha interpuesto el recurso de amparo, con motivo de haber sido condenado por un jurado de imprenta á la pena de quince días de prision, á causa de haberse publicado por el quejoso un artículo bajo el rubro de peculado, en que ataca al ayuntamiento de San Juan del Río.

El ejercicio que tiene el hombre de escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones sin necesidad de exámen, revisión, ó censura alguna anterior á su publicación, es uno de sus inalienables derechos. La facultad de pensar depende de la organización del hombre así como la de transmitir su pensamiento. Por lo mismo, estriba en el derecho natural, y no es una consecuencia de la sociedad, ni una concesión de la ley, sino propiedad inherente al hombre y enclavada, por decirlo así, en su misma naturaleza. Así pues, el acto de dar á luz por medio de la prensa los propios pensamientos, no constituye por sí mismo un delito, sino que crea piezas de convicción que sirven para establecer su prueba.

Así por ejemplo; un escrito sedicioso no es un delito como no lo es el arma que ha servido á un asesino; sino la misma sedición á que provoca el escrito.

Debe por lo mismo tenerse muy presente la distinción entre el delito y su instrumento, por ser de importantes consecuencias. En el caso, no puede considerarse